

EL ABANDONO DE LOS VALORES

Ningún tratado internacional se refiere de forma tan clara a la democracia como el Tratado de la Unión Europea, desde su inicial adopción en Maastricht en 1992 y su importante progreso en materia de valores en las reformas de Ámsterdam en 1998 y de Lisboa de 2009. El Tratado de la Unión Europea (TUE) dedica el art. 2 a los valores, entre los que figuran expresamente los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

Las ampliaciones del pasado siglo XX a nueve Estados (entre otros, España) siempre tuvieron un objetivo económico, el mercado interior, y un objetivo político, sumarse un Estado ya democrático consolidado a un proceso de integración de la ciudadanía y sus Estados. Pero en las ampliaciones del siglo XXI hay un cambio funcional de objetivos: las ampliaciones fueron en sí mismas el instrumento de promoción de la democracia en el continente europeo. Desde entonces, el modelo europeo de ampliación se resume en "europeización" entendida como "democratización". Y si lo vemos desde la óptica de los Estados balcánicos habría que añadir "europeización como forma de pacificación". El art. 49 del TUE reconoce que todo Estado europeo que anhele unirse al proceso de la Unión debe respetar los valores de la Unión y el compromiso de su fomento como requisito para la adhesión. Como la Unión no es solo un mercado interior y sus objetivos se proyectan sobre toda la sociedad, el candidato debe ser un Estado democrático que respete los valores enunciados en el art. 2 TUE.

El respeto a la democracia se refiere en origen y de ejercicio. No debiera limitarse a un cumplimiento formal de tales requisitos antes del ingreso, sino que se requiere una democracia normalizada por la continuidad y la rendición de cuentas. Un elemento imprescindible para la Unión es tener un poder judicial verdaderamente independiente así como el sometimiento de todos los poderes del Estado a la ley y a la autoridad judicial, la libertad de prensa, el respeto a las personas pertenecientes a las minorías, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres, etc. El TUE no exige únicamente gobiernos democráticos en relación con su origen (elegidos por sufragio universal y libre) sino que es una con-

Las violaciones al Estado de Derecho en Polonia y Hungría constata la involución de valores en la UE.

Araceli Mangas Martín

Catedrática de
Derecho Internacional
y Relaciones
Internacionales,
UCM. Académica de
Ciencias Morales y
Políticas



dición mucho más amplia referida al ejercicio continuado del poder.

Ha habido dudas sobre si todos los Estados que entraron de forma masiva en 2004 y en 2007 cumplían plenamente los requisitos. El propio Consejo Europeo parecía tener dudas sobre cómo medir el cumplimiento de las exigencias (16 y 17 de diciembre de 2004, punto 23). El Parlamento Europeo no valoró minuciosamente las solicitudes de ingreso y no debió aceptar transacciones sobre esos valores fundamentales ni presiones gubernamentales. Desde la reforma hecha en Ámsterdam el respeto a los derechos humanos puede ser objeto de un control en dos fases en función de la gravedad (preventiva y de observación o, ante hechos consumados, de sanción) que se regula en el art. 7 TUE. Este mecanismo de control puede ser activado por la Comisión, el Parlamento Europeo o un tercio de los Estados miembros y las decisiones de observación y, en su caso, de sanción se adoptan de común acuerdo por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

HUNGRÍA Y POLONIA: VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

En algunos casos, tras la gran ampliación, ha habido signos preocupantes de conductas poco esperables en Estados democráticos como el trato discriminatorio a las minorías rusas en los Estados bálticos; las actitudes renovadas de falta de respeto a los derechos humanos en el gobierno extremista polaco que le ha llevado al control de la dirección de los medios de radiotelevisión y del Tribunal constitucional; cambios normativos en Hungría que afectan a la libertad de expresión e independencia del poder judicial, así como penalizar el cruce ilegal de fronteras frente al posible ilícito administrativo. En mi opinión, por la gravedad de lo que sucede en Polonia y Hungría estos



dos Estados no sólo debieran haber sido objeto de la monitorización prevista en el art. 7, sino de sanciones graves, amén de que la Comisión debió iniciarles varios procedimientos en constatación de infracción al art. 2 TUE y a varios preceptos de la Carta de Derechos fundamentales de la UE.

La ambigüedad de la Comisión europea es preocupante pues, en su calidad de guardiana de los Tratados, no hace respetar los tratados con demandas contra los Estados miembros infractores como Hungría y Polonia; tampoco está dispuesta a iniciar el procedimiento político del art. 7; la domesticación del Parlamento europeo por los partidos políticos y los Gobiernos le conduce a la falta de iniciativa para activar ese procedimiento; no menos preocupante, aunque previsible, es la tolerancia y falta de sensibilidad democrática de una amplia mayoría de Gobiernos de los Estados miembros hacia los despropósitos de los gobiernos de (extrema) derecha pues bastaría con un tercio de los Estados para poner en marcha los mecanismos preventivos del art. 7 TUE.

Cuando se compara la gravedad de las violaciones al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales en Polonia y Hungría con la situación en Austria en el 2000 (la llegada al poder en coalición de un grupo nacionalista con la democracia cristiana austriaca) y la firme respuesta de la UE –que además no tenía base jurídica para monitorizar a Austria y se tuvo que recurrir al Consejo de Europa–, se constata con dolor la involución de los valores en la UE. Entonces la UE dio un golpe de efecto reivindicando sus valores. Hoy la UE reniega de la libertad de información y de prensa, así como del respeto a la independencia de los jueces. Es grave que dé alas a los movimientos populistas en Europa como que desaliente la confianza de la ciudadanía en el proyecto democrático de convivencia de Estados y ciudadanos.

Turquía

Otra prueba más. Es igualmente desalentador que cuando Turquía hizo esfuerzos por democratizarse y progresar en el respeto a los derechos humanos a finales del siglo pasado y durante los cinco primeros años del siglo XXI, de pronto se topare con el abandono de su candidatura de ingreso en la UE. Por el contrario, ahora que Turquía lleva más de diez años de retroceso y se encamina hacia una autocracia con el poder concentrado en una persona (el presidente Erdogan y su entorno), es cuando se le dan expectativas para su ingreso y se acepta su chantaje y manipulación de una crisis humana.

La involución de Turquía es más que visible. El todopoderoso Erdogan controla a su antojo los medios de comunicación cerrando con descaro los que no le son afines. La represión de las manifestaciones es desproporcionada. Apoyó a los extremistas yihadistas (entre otros Al Nusra) en Siria; reprimió y bombardeó a los kurdos, a pesar de su sacrificio luchando en tierra contra los salafistas y terroristas del Daesh. Propició el desalojo de los campamentos de refugiados en su territorio hacia Grecia, sus traficantes se beneficiaron en cantidades escandalosas con el tráfico de personas, no controló la salida de su territorio de personas para impedir la salida ilegal como es deber de todo Estado, etc. Sabía lo que hacía cuando incendiaba Siria y alentaba la huida hacia Grecia y la UE.

Todo lo había medido Turquía: la injerencia en el conflicto armado interno, su apoyo a los yihadistas, el tráfico del petróleo y la financiación del yihadismo, la destrucción de Siria y la eliminación de una potencia regional competidora. Turquía es la gran inductora de la crisis de los refugiados. Y, sin embargo, ha sido la gran beneficiada del Acuerdo en la denominada “crisis” de los refugiados. La asustadiza UE ha caído en su trampa. La UE premia con más financiación a Turquía, le permuta los potenciales inmigrantes de zonas más necesitadas del planeta por inmigrantes legales de Turquía que podrán llegar sin visado y con la renovada esperanza de integración de un régimen autocrático que desprecia e incumple los valores de la UE; claro, como los incumple la propia Unión.

La Unión carece de valores aunque tenga en vigor un art. 2 del Tratado de la UE. Esa obligación jurídica no la hace respetar a sus Estados miembros ni a los candidatos con todos los medios a su alcance. La Unión ya no está dispuesta a defender el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en su seno. Junto a la lentitud, torpeza y falta de determinación en la gestión de las oleadas de los refugiados, la UE se debilita y disloca. La crisis fue una fuente de oportunidades para robustecer y legitimar el proceso recuperando el apoyo de la ciudadanía. Hoy esa crisis es la crisis moral de la Unión y también la crisis de varios Estados miembros abandonados a los extremismos populistas. Pobre Europa. A.M.M.